

La tecnocracia ambiental de la despolitización: El asesinato de Macarena Valdés y la lucha de la Comunidad Newen de Tránguil en Wallmapu, Chile

por **Fernanda Rojas Marchini** | Universidad de British Columbia | fernanda.rojas.m@gmail.com

y **Maite Hernando Arrese** | Universidad de Wageningen y Universidad Austral de Chile, Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales | maite.hernandoarrese@wur.nl

Macarena Valdés era una mujer mapuche, madre de cuatro hijos, e integrante de la Comunidad Newen de Tránguil ubicada en la localidad de Liquiñe, Región de los Ríos, al sur de Chile. Tenía 32 años cuando fue encontrada muerta por su hijo de 11 años el 22 de agosto de 2016. Días antes, su esposo Rubén Collío había recibido amenazas de muerte y advertencias por oponerse al proyecto Minicentral Tranquil de la empresa austríaca RP Global. Macarena fue asesinada para debilitar la resistencia al proyecto y esto fue encubierto por organismos del estado, pues tanto la Fiscalía como el Servicio Médico Legal establecieron que Macarena se había suicidado. Sin embargo, sus familiares y amigos no aceptaron esta teoría y contrataron a especialistas que desarrollaron una segunda autopsia. Un año y medio más tarde se conocieron los resultados que confirmaron que Macarena no se suicidó. Actualmente, el caso sigue abierto y aún no se identifican responsables.

La Comunidad Newen de Tránguil fue conformada en 2015 por quienes se oponían a la construcción del proyecto Minicentral Tranquil (2.9 MW) —uno de los proyectos del Plan 100 minihidros para Chile— en las tierras de la comunidad mapuche Pedro Quilempán. Las principales opositoras eran las mujeres de la comunidad, quienes tras ser amenazadas de muerte por hombres de su familia que trabajaban para la empresa, solicitaron ayuda a Rubén Collío, Ingeniero Ambiental y Rūtrafe (joyero) mapuche recientemente avecindado en Tránguil con su familia. En este comentario, junto con describir los hechos de violencia contra estas

mujeres y el surgimiento de la Comunidad Newen de Tránguil, analizaremos de qué modo esta violencia, que alcanza su máxima expresión con el asesinato de Macarena, surge como una estrategia para despolitizar a las comunidades en resistencia en Wallmapu. Consideramos que la negación del estado de perseguir a los responsables y promover, en cambio, la tesis del suicidio demuestra que la violencia es un instrumento al servicio de los proyectos de inversión.

Este comentario se estructura de la siguiente manera: En primer lugar, describiremos dos dimensiones bajo las cuales comprendemos el territorio y proyecto político-territorial de Wallmapu, así como dos conceptualizaciones que apoyan nuestra lectura del caso. Posteriormente, explicaremos el proceso de territorialización del proyecto Minicentral Tranquil y las estrategias de la empresa RP Global. Luego nos centraremos en el surgimiento de la Comunidad Newen de Tránguil y la violencia de género en contra de sus integrantes, efectuada por el estado y la empresa privada y algunos hombres de la comunidad Pedro Quilempán que trabajan para la empresa. Argumentamos que esta violencia responde a una estrategia orientada a debilitar a las comunidades en resistencia, que amenazan el control de las empresas sobre “naturalezas baratas”. Finalmente, nos referimos a la tecnocracia ambiental de la despolitización, entendida como aquellos contramecanismos diseñados por el estado para negar la participación política y perseguir, por

medio de lógicas coloniales de eliminación, a quienes asumen roles políticos-ambientales en sus territorios.

Wallmapu: Territorio y proyecto político

El Wallmapu contempla, aunque no se limita solo a, dos dimensiones en su relación con el estado colonial chileno. La primera corresponde al territorio y maritorio mapuche ubicado entre los ríos Bío Bío y Toltén, que fue usurpado casi completamente (95%) por el estado chileno durante la llamada Pacificación de la Araucanía (1861-1883). La ocupación del Wallmapu se consolidó con la imposición de un nuevo sistema de propiedad de la tierra, en el cual se relocalizó a los mapuche dentro de reservas indígenas y se incentivó a inmigrantes europeos a radicarse para “ocupar” y “trabajar” las tierras expoliadas. Durante el siglo XX, se han perpetrado diversas estrategias para mantener la ocupación, siendo la más relevante la privatización de la tierra y los recursos naturales. Esto ha permitido la instalación de industrias extractivistas que, junto con degradar los ecosistemas, socavan la cohesión social de las comunidades mapuche.

La segunda dimensión corresponde al proyecto político de reconstitución del pueblo-nación mapuche, que toma fuerza a comienzos de la década de 1990 cuando surgen diversos movimientos que buscan retomar la lucha y avanzar en un proyecto de reconstitución, ya sea por una vía política o rupturista (Pairicán 2014). A pesar de la fuerza política de estos movimientos, los escasos avances en la relación Chile/Pueblo-nación mapuche ha llevado a intelectuales como Nahuelpán y Antimil (2017) a señalar que el estado, con su insistencia multicultural, no pretende solucionar ni las jerarquías raciales ni la reactualización del colonialismo en el proyecto neoliberal. La criminalización del pueblo mapuche junto con la militarización de comunidades en resistencia continúa vigente.

El proyecto político-territorial Wallmapu es sostenido por un sector movilizad y no involucra a todas las comunidades mapuche ya que muchas de ellas fueron creadas por el estado chileno con el propósito de reemplazar a las autoridades

tradicionales. Por esta razón, el surgimiento de nuevos liderazgos que se plantean en oposición al modelo desarrollista, como es el caso de la comunidad Newen de Tránguil, ha promovido la creación de nuevas organizaciones territoriales que se distinguen de las comunidades funcionales.

Lógicas coloniales de eliminación y el capitalismo de naturalezas baratas

Las investigaciones que han abordado la violencia rural como complemento de las agendas estatales de desarrollo y crecimiento económico han puesto especial énfasis en las lógicas coloniales de eliminación contra personas indígenas y sobre todo mujeres. Por ejemplo, Sofía Zaragocín (2019) investiga junto a un colectivo de mujeres epera la violencia cotidiana que experimentan en la frontera entre Ecuador y Colombia, en un contexto de degradación ambiental, usurpación de territorio y abandono estatal. Para Zaragocín y el colectivo, esta violencia está marcada por el género y constituye parte de una geografía colonialista de la eliminación de aquellos cuerpos considerados desechables, descartables o prescindibles.

Por otro lado, la economía política feminista ha analizado la reproducción del capital desde aquellos cuerpos no considerados por el marxismo ortodoxo. En esta línea, María Mies (1986) argumenta que la expansión capitalista se ha sostenido por tanto tiempo gracias a la reproducción de jerarquías de valor entre la esfera formal de la economía (lo público y visible) y la esfera informal (lo doméstico e invisible). Ella define tres bienes gratuitos que habitan la esfera informal: las mujeres, las colonias, y las naturalezas no humanas. Mientras Val Plumwood atribuye esta devaluación al dualismo cultura/naturaleza, Raj Patel y Jason Moore (2018, 61) desarrollan el término “naturalezas baratas” para enfatizar en la inversión que tanto gobiernos como capitalistas deben hacer para abaratar estas naturalezas (mujeres, colonizados y no humanos) y traducir sus condiciones facilitadoras de la vida a los circuitos de producción y consumo.

La territorialización de las energías renovables no convencionales en Wallmapu: Plan 100 minihidros y la Minicentral Tranquil

A partir de la crisis ambiental global, diversos países han suscrito acuerdos para descarbonizar sus matrices energéticas mediante la incorporación de energías renovables no convencionales (ERNC). El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con agencias internacionales, han sido claves para estimular la inversión de estas energías en América Latina. Desde 2015, gracias a diversos préstamos que han financiado la nueva política de seguridad energética del estado chileno, Agenda 2050, el sector energético ha crecido exponencialmente ocupando en 2016 el primer lugar en inversiones dentro de la economía nacional, posicionando al país como uno de los más competitivos en ERNC a nivel mundial.

El Ministerio de Energía anunció en 2015 el Plan 100 minihidros para Chile, en el cual se propuso asesorar y acompañar a inversionistas privados para desarrollar un centenar de minicentrales hidroeléctricas entre 2014 y 2018. Dadas a las características geográficas de las zonas cordilleranas del centro-sur del país, estos proyectos se localizarían principalmente (70%) en Wallmapu. Por ello, pese al rechazo que han manifestado diversas comunidades, organizaciones mapuche y ambientales, durante los últimos cinco años han proliferado especialmente los proyectos inferiores a 3 MW, los que de acuerdo a la legislación chilena no requieren estudios de impacto ambiental.

La Minicentral Tranquil obtuvo su autorización ambiental en 2012, sin necesidad de ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Dos años más tarde, cuando los plazos para oponerse al proyecto ya habían caducado, la empresa aparece en el territorio para construir su proyecto. Como indica Rubén Collío, warkén (vocero) de la Comunidad Newen de Tránguil: “La respuesta del SEA fue en el 2012 y ellos llegaron casi en el 2015 a la comunidad a empezar a sociabilizar. Y claro, misteriosamente nos enteramos en ese instante, cuando nos quisimos oponer a la instalación de esta empresa, de que hay un plazo de dos años para oponerse.”

La forma en que llegan las empresas a los territorios y la descomposición del tejido social que provocan ha sido un tema denunciado en reiteradas oportunidades. Beatriz Chocori Llanca, vocera del Parlamento mapuche de Coz Coz, señala que: “La primera acción estratégica de ellos [la empresa] es dividir a la comunidad como sea, sobornando, aprovechándose de las necesidades. Cuando se usan esas estrategias de división queda una herida grande que a veces, no nos dan las fuerzas ... ni el tiempo para sanar estas tremendas heridas que quedan en la comunidad.”

La Comunidad Newen de Tránguil y el asesinato de Macarena Valdés

Mientras que los hombres de la comunidad Pedro Quilempán tradicionalmente se han dedicado a la crianza de animales y labores forestales, muchas mujeres han debido migrar hacia las ciudades o hacia Argentina para trabajar de empleadas domésticas y en la cosecha industrial de frutas. Los pocos puestos de trabajo en proyectos de infraestructura que llegan al sector son dirigidos a hombres y consisten en empleos de mano de obra mal remunerados.

La empresa RP Global aprovechó este escenario para prometer nuevos empleos, mejoramiento de caminos y compensaciones económicas. Algunos empleos fueron tomados por hombres de la comunidad que apoyaron la entrada silenciosa de la empresa mediante la entrega de telares y víveres para convencer a las mujeres de apoyar al proyecto. Sin embargo, al comenzar las obras, un grupo de mujeres denunció que la empresa había usurpado aproximadamente 8 hectáreas de su propiedad. Esta denuncia dividió a la comunidad ya que puso en riesgo los empleos conseguidos por los hombres, muchos de ellos familiares cercanos de las mujeres que realizaron la denuncia. La situación empeoró cuando un grupo de hombres de la comunidad (empleados de la empresa) comenzó a amedrentar a las mujeres con llamados telefónicos, ingresos forzados a las casas cuando estaban desocupadas, e inclusive intentando atropellarlas con sus vehículos. Algunas mujeres pidieron ayuda a Rubén y Macarena, con quienes conformaron la Comunidad Newen de Tránguil para distinguirse de la comunidad Pedro Quilempán, que negoció

con la empresa. En agosto de 2016, la nueva comunidad organizó un corte pacífico de ruta para exigir la fiscalización ambiental del proyecto. Tras esta acción directa, las amenazas se dirigieron también en contra de Macarena y Rubén.

Tres semanas después del corte de ruta, la propietaria de la vivienda que arrendaban Macarena y Rubén recibió la visita de dos vecinos que trabajaban para la empresa. Ellos le solicitaron que sacara a Rubén de su casa, pues él estaba revolucionando a la gente, e indicaron que muchas personas querían dañarlo a él y a su familia. El 22 de agosto, Macarena Valdés fue hallada muerta en su casa. Rubén señala que la muerte de Macarena tenía como objetivo debilitar la resistencia: “Yo no tenía claro el por qué, no lograba entender qué estaba pasando [...] dentro de toda esta distorsión me llama la dueña del espacio donde yo vivo y me dice ‘*lamngen*, tengo que contarte algo, ayer vinieron a hacer amenazas aquí a mi casa, me dijeron que esto iba a pasar’ [...] Nos empezamos a dar cuenta de por qué nos habían hecho este daño tan grande ... para tratar de infundirnos miedo, para tratar de callarnos porque saben que tenemos la razón.”

Por una parte, a diferencia de muchos casos en Latinoamérica, en Tránguil no se asesina a una lideresa con larga trayectoria y experiencia, sino que se selecciona una mujer que participa de la resistencia comunitaria. Sin embargo, como lo ha planteado Rubén, creemos que el propósito del asesinato de Macarena fue desarticular a toda la comunidad por oponerse a la agenda energética/desarrollista del estado. Por otra parte, los hombres de la comunidad Pedro Quilempán que decidieron trabajar para la empresa vieron en estos empleos una posibilidad de entrar a la esfera visible de la economía descrita por Mies. Esta decisión fue tomada sin considerar los impactos del proyecto para la comunidad ni mucho menos las secuelas que la violencia patriarcal deja en estas comunidades. Estrategias corporativas como las vistas en el caso de Tránguil han ocurrido en otros territorios de Wallmapu, lo que da cuenta de un aparato corporativo que evita sociabilizar los proyectos mientras compromete a los miembros

de las comunidades —aprovechando violencias como las descritas— para dividir y evitar procesos de consulta indígena y/o participación ciudadana.

La tecnocracia ambiental de la despolitización

En este comentario hemos argumentado que la violencia experimentada por la Comunidad Newen de Tránguil, y que alcanza su máxima expresión con el asesinato de Macarena Valdés, tiene relación con la actualización de las lógicas coloniales de eliminación y la incorporación de naturalezas baratas. Con esto no pretendemos reducir el caso de Tránguil a la lógica capitalista del estado-nación chileno, sino proponer una lectura de los patrones de violencia que emergen dentro de la agenda energética. En esta agenda, los mecanismos de participación que el propio estado ha diseñado están debilitándose, mientras las comunidades en resistencia exigen instancias reales de participación vinculante.

Creemos que esta violencia se relaciona con la necesidad del complejo estado/empresa privada de mantener a los cuerpos en resistencia devaluados, mientras las naturalezas no humanas son traducidas a unidades legibles para la inversión. Esta necesidad está articulando lo que llamamos la “tecnocracia ambiental de la despolitización”: los mecanismos creados para debilitar las instancias de participación que el propio estado ha generado anteriormente. Es una tecnocracia porque utiliza instrumentos técnicos diseñados en la gramática del gobierno que determinan cómo se desenvuelve la participación ciudadana en consultas de proyectos, con la finalidad de facilitar su tramitación. Retomando la economía política feminista, esta tecnocracia es una inversión que hace el estado para mantener a las comunidades en resistencia —y especialmente a las mujeres indígenas— al margen y devaluadas, carentes de argumentos para opinar con propiedad sobre proyectos de desarrollo.

Uno de los mecanismos de esta tecnocracia opera incluso antes de la evaluación ambiental de proyectos para eximir a las mini centrales hidroeléctricas menores a 3 MW de someterse a evaluación ambiental. Sin embargo,

investigaciones como la de Sarah Kelly enfatizan que no hay suficiente información para desestimar los impactos de este tipo de proyectos (recomendamos Kelly 2019). Otro mecanismo se activa cuando las comunidades en resistencia exigen la evaluación ambiental, dejando en evidencia los abusos y negligencias ambientales de las empresas. Esta exigencia es clave para comprender la violencia física y psicológica ejercida hacia las mujeres, así como el asesinato de Macarena Valdés; ambas violencias operan como mecanismos de despolitización. Pese a que esta violencia no está legalmente establecida (como sí lo está la exclusión de ciertos proyectos de someterse a evaluación), consideramos que la negación del estado de perseguir a los responsables y promover, en cambio, la tesis del suicidio demuestra que la violencia (en su expresión física y en términos de justicia e impunidad) es un instrumento al servicio de los proyectos de inversión.

El estado chileno aplica una lógica capitalista, patriarcal y colonial al excluir a las comunidades de los procesos de participación y toma de decisión, por considerarlas incapaces de emitir opiniones informadas. Al negar la participación vinculante y definir a priori que las minicentrales no generan impactos socioecológicos significativos, el estado busca facilitar la rápida aprobación de proyectos, basándose en criterios tecnocráticos para volver objetivas decisiones políticas y evadir el rechazo de comunidades afectadas.

Macarena Valdés cumplía un rol vital para sostener el movimiento en resistencia. Ella era una caminante: alguien que —como señala el movimiento zapatista— sin ser lideresa, participaba comprometidamente en la resistencia de su comunidad. Atacarla a ella y a las mujeres responde a una estructura que favorece la eliminación de ciertos cuerpos con el objetivo de debilitar políticamente a las comunidades y mantener a las mujeres en un espacio devaluado y marginal. Pero las mujeres también responden y resisten creativamente. Desde esta creatividad surgen otro tipo de organizaciones, comunidades, *lof* tradicionales y redes de diversa índole que se proponen resistir al avance del modelo extractivista en sus territorios, como ocurrió en la comunidad

Newen de Tránguil. Esta resistencia busca hacer visible otras formas de vivir colectivamente: formas en las que el capitalismo sustentado en el dualismo cultura/naturaleza, que ha permitido las naturalezas y cuerpos devaluados, sea reescrito con un proyecto de mundo en el que quepan muchos mundos.

Agradecimientos

Queremos agradecer a Rubén Collío Benavides y Beatriz Chocori Llanca por la lectura y autorización para utilizar sus palabras en este texto. También agradecemos los comentarios de José Barrena Ruiz, Ximena Cuadra Montoya y Daniel Pérez Gámez sobre una versión temprana de este manuscrito y que aportaron significativamente a su mejoramiento.

Referencias

Kelly, Sarah. 2019. "Megawatts Mask Impacts: Small Hydropower and Knowledge Politics in the Puelwillimapu, Southern Chile". *Energy Research and Social Science* 54 (August): 224-235.

Mies, Maria. 1986. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*. London: Zed Books.

Nahuelpán, Héctor, y Jaime Antimil. 2017. "La lucha mapuche por la vida frente a un nuevo proyecto racial global". *LASA Forum* 48 (2): 37-38.

Pairicán Padilla, Fernando. 2014. *Malon: La rebelión del movimiento mapuche, 1990-2013*. Santiago, Chile: Pehuén.

Patel, Raj, y Jason Moore. 2018. *A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet*. Berkeley: University of California Press.

Zaragocín, Sofía. 2019. "Gendered Geographies of Elimination: Decolonial Feminist Geographies in Latin American Settler Contexts". *Antipode* 51 (1): 373-392. //